SENADO DE PUERTO RICO

P. del S. 1912

2 de diciembre de 2010

Presentado por el señor *García Padilla*

Referido a las Comisiones de Seguridad Pública y Asuntos de la Judicatura; y de Hacienda

LEY

Para crear el Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales dentro del cuerpo de la Policía de Puerto Rico; establecer su estructura operacional, delimitar sus funciones, deberes y responsabilidades; crear el cargo de Superintendente Auxiliar a Cargo de Crimen Organizado; asignar fondos; establecer un nuevo currículo de Justicia Criminal; establecer un Reglamento Especial de Servicios Generales; establecer un plan de vigilancia en las costas, puertos y aeropuertos; prohibir el uso ilegal de tecnología destinada a la investigación y procesamiento criminal y disponer sanciones; para enmendar el inciso (c) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme de Confiscaciones de 1988”, a fin de concederle prioridad al Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales en la asignación o transferencia de bienes confiscados, y para otros fines.

EXPOSICION DE MOTIVOS

El problema del crimen es, sin duda, el problema principal de Puerto Rico y el reto más importante que enfrenta nuestra sociedad. El problema del crimen y sus ramificaciones de orden social y económico han impactado negativamente nuestra capacidad de desarrollo y de impulsar la búsqueda de felicidad individual y colectiva.

El tráfico de drogas es una de las causas principales del crimen violento en Puerto Rico. Según las agencias federales, alrededor del noventa (90) por ciento de todos los crímenes violentos que se registran en la isla tienen relación con el narcotráfico. Además, entre el setenta y cinco (75) por ciento y el ochenta (80) por ciento de los asesinatos están relacionados con la venta de drogas. La tasa de asesinatos en Puerto Rico es una de las más altas en el mundo entero.

Para establecer una política pública clara y definida para atacar este mal, es necesario identificar los verdaderos factores que enmarcan este problema. La Comisión sobre Integridad Pública de la Cámara de Representantes realizó durante el año 2004 una investigación exhaustiva con miras a identificar las razones verdaderas de la entrada ilegal de drogas y armas de fuego así como presentar diversas alternativas para atacar estos males.

La Comisión legislativa identificó veinticinco (25) hallazgos sobresalientes los cuales se resumen a continuación:

1. Colombia, Perú, Bolivia y México se han convertido en los principales países productores de cocaína, heroína y marihuana en el mundo.
2. En un año se producen unas novecientas (900) toneladas de cocaína en todo el planeta. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas en todo el mundo. Se estima que, en el caso de la cocaína, en Estados Unidos se consumen quinientas sesenta y tres (563) toneladas en un año, lo que representa el sesenta y tres (63) por ciento de toda la cocaína que se produce.
3. De las quinientas sesenta y tres (563) toneladas de cocaína que entran a los Estados Unidos, doscientas veinticinco (225) toneladas - o el cuarenta (40) por ciento - entran a territorio continental utilizando a Puerto Rico como puente o punto de entrada.
4. De las doscientas veinticinco (225) toneladas que se estiman pasan o llegan a la isla, unas 30 toneladas se quedan para consumo local. De esa cifra, en un año en promedio, sólo se confiscan unos 1,100 kilogramos - el equivalente a 2.5 toneladas - lo que representa el ocho (8) por ciento de lo que se queda y menos del tres (3) por ciento de lo que pasa por Puerto Rico.
5. Según la Agencia Federal Antidrogas (DEA), en un periodo de cuatro (4) años, entre el 1999 y el 2002, en Puerto Rico se confiscaron veinte dos mil doscientas cincuenta (22,250) kilogramos de cocaína, trescientos seis (306) kilogramos de heroína y mil ochocientos cuarenta y ocho (1,848) kilogramos de marihuana cifras que representan el 2.3% del total de la droga que pasó por la isla en ese mismo periodo de tiempo.
6. Puerto Rico es un lugar estratégico para los narcotraficantes ante el hecho de que toda carga que llegue a la isla está dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos para efectos de Aduana. Esto implica que cualquier carga, una vez está aquí, queda exenta de inspecciones para entrar a los Estados Unidos continental.
7. Los lugares de procedencia de las drogas que entran a Puerto Rico son los siguientes: cocaína y heroína, Centro y Sur América; la marihuana, de México, California, República Dominicana, Haití, Jamaica y las Islas Vírgenes.

8. La entrada ilegal de drogas a Puerto Rico ha cambiado durante los últimos años. Ahora se logra utilizando los puertos - mediante la carga marítima comercial - los aeropuertos y las costas, mediante la utilización de lanchas de alta velocidad y botes de placer.
9. Las avionetas se utilizan de forma mínima ya que los radares detectan con suma facilidad el despegue de cualquier aeronave desde Centro o Sur América. En Puerto Rico existe el radar ROTHER, ubicado en los municipios de Lajas y Vieques y el Aerostato ubicado en el municipio de Lajas. Además, existen los equipos de la Administración Federal de Aviación para toda la isla. En términos generales, el espacio aéreo está controlado con gran efectividad, no así las costas, puertos y aeropuertos.
10. Se conoce que las empresas de narcotraficantes han organizado un sofisticado sistema de tráfico ilegal de indocumentados como señuelo para la entrada ilegal de drogas. El proceso consiste en enviar barcazas con transmisores y celulares para que sean detenidos por la Guardia Costanera mientras, simultáneamente, se entra la droga por lanchas de alta velocidad en las costas del oeste y sur del país.
11. El noventa y ocho (98) por ciento de las armas ilegales que entran a la isla provienen de los Estados Unidos ya que este es el país donde más fácil se adquiere un arma de fuego en todo el mundo. Prácticamente todas las armas ilegales entran por la carga marítima y aérea comercial porque no está sujeta a inspección de Aduana. El Departamento de Hacienda inspecciona solamente algunos paquetes de carga para efectos de pago de arbitrios pero la agencia, al presente, sólo tiene una máquina de Rayos X operando. La Policía de Puerto Rico no tiene facultad en ley para abrir furgones, cargamentos o equipajes si no existe un motivo fundado.
12. La Comisión legislativa ha conocido una práctica reciente de sujetos que compran armas de fuego en piezas en los Estados Unidos a través del sistema de Internet ofreciendo solamente su número de licencia de conducir. Una vez adquirida, se traen a la isla utilizando los servicios de entrega inmediata que no son sometidos a inspecciones de detección de metales o Rayos X. Hemos conocido casos en donde una sola persona puede armar entre diez (10) a quince (15) armas de fuego, incluyendo AK-47, pistolas y armas automáticas, en tan solo 72 horas.
13. Puerto Rico cuenta con ocho (8) puertos y once (11) aeropuertos. Los principales puertos están ubicados en los municipios de San Juan, Mayagüez, Ponce, Aguadilla, Guánica, Fajardo, Guayama y Guayanilla. El muelle de San Juan es el cuarto muelle de mayor volumen de carga y movimiento de pasajeros en el hemisferio y el número 14 en todo el mundo. Para el año 2000, en Puerto Rico se movieron unas 27.6 toneladas de carga marítima estimándose que dos terceras partes sesenta y seis (66) por ciento provienen de Centro y Sur América (carga internacional), treinta (30) por ciento provienen de los Estados Unidos continental

(carga doméstica) y el restante cuarto (4) por ciento de Europa y otros países caribeños (carga internacional).

14. Se estima que en un año pueden entrar unos setecientos mil (700,000) furgones a la isla y con las exportaciones esa cifra puede alcanzar el movimiento de hasta 2 millones de furgones (importaciones y exportaciones). De esa cifra, sólo se inspeccionan unos treinta mil (30,000) furgones que entran o salen de la isla, de los cuales veinticinco mil (25,000) de ellos se inspeccionan de forma electrónica y cinco mil (5,000) de forma manual. Esta cifra significa que en Puerto Rico sólo se inspecciona entre el uno (1) por ciento y el cuatro (4) por ciento de toda la carga marítima que pasa por la isla.
15. En Puerto Rico sólo existen dos máquinas de Rayos X para examinar todos los furgones. Ambas pertenecen a Aduana Federal. Una de ellas, una máquina portátil, está ubicada en el muelle de San Juan y la otra es una máquina fija ubicada en el muelle de Ponce. El Gobierno de Puerto Rico adquirió dos máquinas de Rayos X que se encuentran varadas por un pleito legal. Al presente, los restantes seis muelles de carga que existen en la isla carecen de estos equipos.
16. El manejo de instalaciones portuarias es sumamente complejo. En Puerto Rico existen unas treinta y cinco (35) compañías de agentes navieros que administran facilidades portuarias. Estas compañías controlan el acceso a los muelles asignados mediante la contratación de compañías privadas de seguridad. Algunas de estas compañías han sido señaladas por incumplimiento en los requisitos impuestos para este tipo de negocio.
17. En torno a los aeropuertos y las rutas aéreas, en un año se efectúan 900 vuelos comerciales entre Puerto Rico y los Estados Unidos, a razón de setenta y cinco (75) vuelos diarios que mueven 1.5 millones de pasajeros. Esta cantidad de personas mueven unas veinticinco mil (25,000) toneladas de carga anualmente.
18. La Comisión entiende que las medidas de inspección a los pasajeros son sumamente eficientes particularmente por las reglamentaciones existentes de Aduana y la Homeland Security Agency. Esta situación, sin embargo, es distinta en el manejo de la carga. Los sistemas de inspección de carga son altamente deficientes y la realidad es que toda la carga marítima o aérea que proviene de los Estados Unidos nunca es inspeccionada.
19. Uno de los grandes problemas de seguridad que se enfrentan en los puertos y aeropuertos es la falta de personal y la falta de equipo tecnológico. A manera de ejemplo, en horas de la noche, en el Aeropuerto Internacional solamente hay tres efectivos de seguridad de la Autoridad de los Puertos para todas las facilidades del aeropuerto, incluyendo el edificio principal, los terminales, los accesos, las verjas y las dos pistas de aterrizaje.

20. La misma situación la enfrentan las autoridades federales. Durante una visita al muelle de San Juan pudimos constatar que Aduanas tiene treinta y cinco (35) efectivos para vigilar todas las entradas de la isla divididos en tres turnos.
21. Una evaluación de los equipos existentes demuestra que el Gobierno de Puerto Rico tiene un atraso de casi diez (10) años en la utilización e implantación de nueva tecnología y la mecanización de sus sistemas en el área de seguridad.
22. La seguridad en los aeropuertos recae principalmente en la Autoridad de los Puertos y la Policía de Puerto Rico. La Unidad de Control de Vicios es la que tiene a su cargo todo lo relacionado a la lucha contra la droga y la inspección de pasajeros y equipaje. Esta unidad sólo mantiene presencia en dos de los once aeropuertos existentes en el país.
23. Las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) tiene a su cargo la vigilancia de las costas, puertos y aeropuertos mediante vigilancia aérea y marítima. Esta Unidad, de gran importancia, sólo cuenta con el dos (2) por ciento del total de efectivos de la uniformada y con el 2.4% del total de presupuesto asignado a la Policía de Puerto Rico.
24. La Policía de Puerto Rico no ha culminado la implantación del sistema de registro de armas de forma electrónica y tampoco se ha podido implantar un procedimiento ordinario de supervisión a las armerías.
25. Al presente la Policía de Puerto Rico dispone de unas mil (1,000) armas mensuales (12,000 armas al año) que son desechadas en el mar a doce (12) millas de distancia, lo que implica un serio daño ambiental que requiere acciones inmediatas.

Estos hallazgos ponen en perspectiva la realidad que vive Puerto Rico, así como las áreas gubernamentales que requieren atención.

El aumento en el tráfico ilegal de sustancias controladas ha causado, a su vez, un incremento significativo en el uso de armas de fuego ilegales. Datos estadísticos recopilados por la Policía evidencian la seriedad del problema. En el año 2000, las estadísticas reflejaron que durante las intervenciones y arrestos realizados por la comisión de delitos relacionados al tráfico de drogas fueron ocupadas cuatrocientas sesenta y tres (463) armas ilegales. Para los años 2001, 2002 y 2003 fueron ocupadas mil trescientas veintiséis (1,326). Las armas de fuego cuya tenencia es ilegal han sido traídas de forma clandestina desde otras jurisdicciones y algunas adquiridas durante la comisión de otros actos delictivos, tales como robos y escalamientos.

Existen estadísticas provenientes de agencias federales que reflejan que más de 2,500 armas de fuego utilizadas en Puerto Rico desde el 1999 fueron compradas legalmente en los Estados Unidos, por lo que se entiende que las mismas están siendo objeto de trasiego a través del servicio postal, así como de la carga marítima y aérea.

A lo largo de las últimas décadas, las gestiones del gobierno para combatir el crimen han logrado adelantos pero no así combatir efectivamente una industria ilegal que mueve cerca de \$3 billones en la isla y que mantiene a unas ochenta mil (80,000) personas en actividades criminales de todo tipo.

El gobierno tiene que proveer un claro delineamiento de política pública sobre el control de las drogas y uso de armas ilegales, con la implantación de una contundente, millonaria y poderosa ofensiva que ataque directamente a las organizaciones criminales, así como a las estrategias de contrabando de armas y drogas.

El Departamento de Justicia, creado por virtud de la Ley Núm. 6 de 24 de julio de 1954, según enmendada, tiene el deber ministerial de representar al pueblo de Puerto Rico en procedimientos ante los tribunales judiciales. Tiene a su cargo también dirigir las investigaciones a través del Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) para combatir el crimen organizado, la corrupción y los actos delictivos contra la función pública.

Por otro lado, el cuerpo de la Policía de Puerto Rico, establecido por virtud de la Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996”, tiene como función principal la lucha contra el crimen. Los miembros del cuerpo de la Policía de Puerto Rico han realizado un trabajo de excelencia, de gran dedicación y sacrificio sin contar con todos los equipos necesarios, la nueva tecnología y con una estructura organizativa que permita una acción más ágil en la prestación de servicios de protección a la ciudadanía.

Por décadas ha existido también una falta de coordinación y comunicación entre las agencias locales y federales, así como la duplicidad de funciones que ha impedido el tener la efectividad necesaria para frenar la actividad delictiva en cuanto al trasiego de drogas y el uso de armas ilegales.

Para atender esta situación, esta Asamblea Legislativa entiende necesario examinar nuevas alternativas. Una de ellas es crear un nuevo Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales dentro de la Policía de Puerto Rico. La creación de este

Negociado tiene el propósito de establecer una unidad altamente especializada que se dedique exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico y las armas ilegales. Este Negociado tendrá autonomía fiscal y operacional.

La Asamblea Legislativa entiende necesario crear el nuevo Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales, el cual funcionará como dependencia autónoma dentro de la Policía de Puerto Rico. El Negociado será dirigido por un Superintendente Auxiliar a Cargo de Crimen Organizado, quien será nombrado por el Superintendente de la Policía bajo un nombramiento de confianza.

El Negociado contará con tres divisiones: la Unidad de Operaciones Especiales de Campo, la Unidad de Investigación Criminal y la Unidad de Recursos Tecnológicos.

El Negociado absorberá de forma integrada las unidades del Cuerpo de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA), la Unidad de Armas y Drogas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), la División de Drogas de la Unidad de Control del Vicio de la Policía y la unidad canina de la Policía.

El Negociado además coordinará sus trabajos con la División de Seguridad de la Autoridad de los Puertos y la Unidad de Apoyo Tecnológico de la Guardia Nacional.

Sus funciones principales se centrarán en los procesos de investigación e intervención con el narcotráfico y la entrada ilegal de armas. Sus responsabilidades serán velar por la seguridad de las costas, aeropuertos, muelles de carga y turísticos, así como realizar investigaciones de crimen organizado, coordinar operativos de investigación e intervención con las autoridades federales, realizar acuerdos de trabajo en conjunto con otros gobiernos y participar en operativos conjuntos de incautación de drogas y armas con la ayuda de la Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y la Guardia Nacional de Puerto Rico.

La Asamblea Legislativa entiende que mediante la creación por legislación de este nuevo Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales y con la fusión de los diversos recursos provenientes de otras dependencias gubernamentales, se reestructurarán los esfuerzos gubernamentales para el establecimiento e implantación de un plan ofensivo sin precedentes contra el crimen organizado.

DECRETASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Artículo 1.-Título.-

2 Esta Ley se conocerá como “Ley del Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el
3 Narcotráfico y las Armas Ilegales”.

4 Artículo 2.-Definiciones.-

5 A los efectos de esta Ley, a menos que de su contexto se deduzca otra cosa, los
6 siguientes términos tendrán el significado que se expresa a continuación:

7 (a) Agencia Estatal – significa cualquier departamento, agencia,
8 instrumentalidad, municipio, corporación, pública o subsidiaria de ésta,
9 división, negociado, rama u oficina del Gobierno del Estado Libre Asociado
10 de Puerto Rico.

11 (b) Agencia Federal – significa los Estados Unidos de América, el Presidente,
12 cualquier agencia o departamento del Gobierno de los Estados Unidos o
13 cualquier corporación, agencia o instrumentalidad hasta este momento o en el
14 futuro creada, designada o establecida por el Gobierno de los Estados Unidos
15 de América.

16 (c) Agente – significa agente del orden público o cualquier miembro u oficial del
17 Gobierno de Puerto Rico o de los Estados Unidos de América, así como
18 cualquier subdivisión política de Puerto Rico o de Estados Unidos, entre
19 cuyos deberes se encuentran: efectuar arrestos, incluyendo, pero sin limitarse
20 a, los miembros del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos
21 Naturales y Ambientales, Policía de Puerto Rico, Policías Auxiliares, Policía
22 Municipal, los agentes investigadores del Negociado de Investigaciones

1 Especiales del Departamento de Justicia, los oficiales de custodia de la
2 Oficina de Servicios con Antelación al Juicio, Guardia Nacional mientras se
3 encuentren en funciones o ejercicios oficiales, los oficiales de custodia de la
4 Administración de Instituciones Juveniles, el cuerpo de seguridad interna de
5 la Autoridad de los Puertos, el Director de la División para el Control de
6 Drogas y Narcóticos y los Inspectores de Sustancias Controladas de la
7 Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción, los
8 agentes investigadores de la Secretaría Auxiliar de Investigaciones del
9 Sistema Correccional del Departamento de Corrección y Rehabilitación y los
10 Inspectores de la Comisión de Servicio Público, así como los alguaciles de
11 tribunales federales con jurisdicción en Puerto Rico y los inspectores de
12 rentas internas del Departamento de Hacienda.

13 (d) Arma de Fuego – significa cualquier arma, sin importar el nombre por el cual
14 se conozca, capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de una
15 explosión. Esta definición no incluye aquellos artefactos de trabajo tales
16 como, pero sin limitarse a, las pistolas de clavos utilizadas en la
17 construcción, mientras se utilicen con fines de trabajo, arte u oficio.

18 (e) Armas Ilegales – significa la tenencia, posesión y transportación de un arma
19 de fuego, o piezas de éstas y sus municiones sin que se posea la licencia que
20 para dichos fines expide el Superintendente de la Policía de Puerto Rico.

21 (f) Departamento – significa el Departamento de Justicia del Estado Libre
22 Asociado de Puerto Rico.

1 (g) Gobernador – significa el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto
2 Rico.

3 (h) Negociado, Fuerzas Conjuntas – significa el Negociado de las Fuerzas
4 Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales.

5 policía, Cuerpo, Organización, Fuerza – significa la Policía de Puerto Rico.

6 (i) Superintendente Auxiliar a Cargo de Crimen Organizado, Superintendente
7 Auxiliar - significa el funcionario nombrado por el Superintendente de la
8 Policía de Puerto Rico de la forma y por el término dispuesto por esta Ley,
9 para dirigir el Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y
10 las Armas Ilegales.

11 Artículo 3.-Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas
12 Ilegales.-

13 Se crea el Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas
14 Ilegales, una dependencia autónoma adscrita a la Policía de Puerto Rico. El Negociado de
15 las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales será conocido también
16 como las “Fuerzas Conjuntas”. Esta dependencia se crea por virtud de lo dispuesto en la
17 Sección 16 del Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que
18 faculta a la Asamblea Legislativa a crear, consolidar, o reorganizar departamentos ejecutivos
19 y definir sus funciones.

20 Artículo 4.-Funciones del Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico
21 y las Armas Ilegales.-

22 El Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales
23 tendrá a su cargo los procesos de investigación e intervención con el narcotráfico y la

1 entrada ilegal de armas de fuego en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El nuevo
2 Negociado tendrá la responsabilidad de velar y proteger la seguridad de las costas,
3 aeropuertos, muelles de carga y muelles turísticos. Realizará investigaciones de crimen
4 organizado, coordinará operativos de investigación e intervención con las autoridades
5 federales, colaborará con acuerdos de trabajo existentes con otros gobiernos y participará en
6 operativos conjuntos de incautación de drogas y armas en coordinación y con la ayuda de la
7 Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales, la Guardia Nacional y
8 cualesquiera otra agencia estatal y federal de orden público.

9 Artículo 5.-Superintendente Auxiliar, Creación del cargo y término.-

10 El Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales
11 estará dirigido por un Superintendente Auxiliar, quien responderá directamente al
12 Superintendente de la Policía de Puerto Rico y servirá en dicha posición a discreción de
13 éste. El Superintendente Auxiliar formará parte del Servicio de Confianza y su salario será
14 fijado por el Superintendente mediante reglamento, tomando en consideración la
15 complejidad y alto grado de especialización del Negociado.

16 Cualquier miembro de la Fuerza que sea nombrado al cargo de Superintendente
17 Auxiliar del Negociado ocupará el rango de Coronel mientras se desempeñe como
18 Superintendente Auxiliar. Al cesar en sus funciones, regresará al rango permanente que le
19 corresponda, el sueldo asignado al mismo y el paso automático, de no haber estado en el
20 máximo de la escala de rango que ocupaba antes de pasar al puesto de confianza.

21 Artículo 6.-Deberes, facultades y poderes del Superintendente Auxiliar.-

22 El Superintendente Auxiliar tendrá las siguientes facultades, deberes y poderes:

- 1 (a) Delinear el plan de trabajo, la utilización de recursos fiscales, personal y
2 equipo del Negociado.
- 3 (b) Determinar mediante Reglamento, que deberá ser aprobado por el
4 Gobernador, la organización y estructura interna del Negociado, así como las
5 obligaciones, responsabilidades y conducta de sus miembros, de sus
6 empleados civiles, agentes y cualquier otro asunto necesario para el
7 funcionamiento del Negociado.
- 8 (c) Reglamentar, con la aprobación del Gobernador, los requisitos de
9 reclutamiento, adiestramiento y capacitación y ejercer el poder nominador
10 sobre los empleados del Negociado, conforme a las disposiciones de la Ley
11 Núm. 53 de 10 de junio de 1996, según enmendada, conocida como “Ley de
12 la Policía de Puerto Rico de 1996” y de la Ley Núm. 184 de 3 de agosto de
13 2004, conocida como “Ley para la Administración de los Recursos Humanos
14 en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.
- 15 (d) Crear y otorgar bonificaciones por servicios destacados y meritorios,
16 conforme al Reglamento que, con la aprobación del Gobernador, para dichos
17 fines se establezca.
- 18 (e) Establecer la adecuada coordinación con las agencias del Gobierno Federal
19 que puedan proveer recursos y aportar esfuerzos para lograr los propósitos de
20 esta Ley.
- 21 (f) Realizar estudios para ampliar los procesos de investigación del crimen
22 organizado sobre la experiencia de otras jurisdicciones que tengan en vigor

1 legislación similar y establecerá relaciones de mutua cooperación e
2 intercambio de información con esas jurisdicciones.

3 (g) Contratar y adquirir con cargo a los fondos disponibles el personal técnico o
4 de asesoramiento y los recursos tecnológicos que sean necesarios para
5 cumplir con los objetivos de esta Ley.

6 (h) Solicitar a las agencias estatales, sus corporaciones públicas o
7 instrumentalidades el destaque de aquellos agentes y funcionarios; así como
8 el equipo, materiales y suministros que sean necesarios para la consecución
9 de los propósitos de esta Ley.

10 (i) Concertar todos aquellos convenios y acuerdos con el Gobierno Federal o sus
11 agencias y con las agencias estatales o sus dependencias, tales como la
12 Policía de Puerto Rico, el Negociado de Investigaciones Especiales, la
13 Autoridad de los Puertos y la Guardia Nacional que sean necesarios para el
14 control del narcotráfico y el tráfico de armas ilegales.

15 (j) Rendir informes periódicos y estadísticos al Gobernador, a la Asamblea
16 Legislativa y al Superintendente de la Policía sobre el desarrollo y la
17 ejecución del Negociado y los mismos contendrán recomendaciones de
18 acción futura.

19 (k) Realizar todos aquellos actos que sean incidentales y necesarios para cumplir
20 con los propósitos de esta Ley.

21 Artículo 7.-Componentes estructurales y organizacionales del Negociado.-

22 El Negociado de las Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales
23 tendrá la responsabilidad de ser el principal custodio de la vigilancia de los puertos,

1 aeropuertos y las costas de la jurisdicción territorial y marítima del Estado Libre Asociado
2 de Puerto Rico, incluyendo todas las instalaciones públicas y/o privadas que estén dentro de
3 su marco de acción. El Negociado tendrá una organización mínima de administración y
4 estará dividida en tres (3) unidades de trabajo para propósitos operacionales.

5 **La Unidad de Operaciones Especiales de Campo en Rápida Acción** – Esta
6 Unidad tendrá la responsabilidad de establecer un plan de vigilancia electrónica y de
7 efectivos en todas las costas, puertos y aeropuertos del país, incluyendo la intervención con
8 embarcaciones de placer, comerciales o de cualquier tipo, según el estado de derecho
9 vigente. Además, esta Unidad efectuará arrestos y detención de sospechosos, se incautará de
10 drogas y/o armas legales o ilegales o cualquier evidencia que sean utilizadas en cualquier
11 tipo de actividad criminal. Esta Unidad deberá operar las veinticuatro (24) horas del día los
12 siete (7) días a la semana en todos los puertos, aeropuertos y las áreas designadas de las
13 costas del país para asegurar una vigilancia continua. Esta Unidad operará desde un Centro
14 de Mando para todo el país.

15 **La Unidad de Investigación Criminal** - Esta Unidad tendrá a su cargo la
16 implantación de un plan de acción sobre técnicas de investigación criminal, uso de
17 tecnología para el esclarecimiento de casos, participación de agentes encubiertos y
18 grabaciones no telefónicas que ayuden en el esclarecimiento de casos, la identificación de
19 sospechosos, la identificación de empresas criminales y sus formas de operar así como la
20 práctica de lavado de dinero y cualquier tipo de actividad ilegal producto del crimen
21 organizado.

22 **La Unidad de Recursos Tecnológicos** – Esta Unidad mantendrá permanentemente
23 un proceso de evaluación, identificación y uso de tecnología de todo tipo que ayude en la

1 lucha contra el narcotráfico y las armas ilegales así como la detección de las nuevas
2 tendencias del crimen organizado sobre el uso de tecnología. Esta Unidad estará dotada de
3 los recursos tecnológicos más avanzados para vigilar, investigar, rastrear y detectar el
4 narcotráfico y el trasiego ilegal de armas en las costas, aeropuertos, muelles de carga y
5 turísticos en la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

6 Artículo 8.-Sobre la Transferencia de Personal, Administración, Presupuesto y
7 facultad de solicitar destacados

8 Se transfiere al Negociado la totalidad del personal, equipos y presupuesto, o el
9 balance de éste, asignado al 1 de julio de 2004 a las siguientes dependencias: el Negociado
10 de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico, la
11 Superintendencia Auxiliar de Estrategias contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado de
12 la Policía de Puerto Rico, el personal en destaque de la Policía de Puerto Rico que esté
13 asignado en funciones de investigación e intervención con el tráfico de drogas y armas
14 ilegales en los diversos “Task Forces” con las agencias federales, la División de Drogas de
15 la Unidad de Control de Vicios de la Policía, la Oficina de Reclutamiento de Agentes
16 Encubiertos de la Unidad de Control de Vicios y la Unidad de Crimen Organizado de la
17 Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales. El personal transferido al
18 Negociado conservará todos los derechos adquiridos como empleado público.

19 Secretario Auxiliar queda facultado a solicitar a otras agencias estatales, el destaque
20 de empleados necesarios para el funcionamiento del Negociado, los cuales conservarán
21 todos los derechos del sistema de personal adquiridos. Se dispone que para fines de
22 reclutamiento, el Negociado constituirá un Administrador Individual a tenor con la Ley
23 Núm. 184 de 3 de agosto de 2004, conocida como la “Ley para la Administración de los

1 Recursos Humanos en el Servicio Público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Las
2 agencias concernidas deberán adoptar un procedimiento de transición ordenado en relación
3 al nuevo Negociado para disponer detalles o establecer acuerdos que faciliten la
4 implantación de esta Ley.

5 Artículo 9.-Asignación Presupuestaria

6 A los fines de lograr los propósitos de esta Ley, se le asigna al Negociado la suma de
7 ciento noventa y tres millones (193,000,000) de dólares provenientes de los siguientes
8 fondos: sesenta millones (60,000,000) de dólares de las asignaciones correspondientes al
9 fondo operacional de la Policía de Puerto Rico; cuatro (4) millones (4,000,000) de dólares
10 asignados a la Policía de Puerto Rico por el Programa Homeland Security para el año fiscal
11 2004-05; cuatro (4) millones (4,000,000) de dólares provenientes de los fondos asignados al
12 Departamento de Justicia para el adiestramiento de efectivos en crimen organizado; y la
13 aprobación de una línea de crédito de ciento veinticinco millones (125,000,000) de dólares
14 por parte del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) que estará garantizada a diez (10)
15 años mediante aprobación expresa por Resolución Conjunta por la Asamblea Legislativa.
16 Una vez aprobado este presupuesto, la Asamblea Legislativa vendrá obligada a consignar un
17 presupuesto anual para el Negociado, en forma de una partida de línea en el presupuesto de
18 la Policía de Puerto Rico, que nunca podrá ser menor al del año anterior. El Negociado
19 tendrá plena autonomía fiscal y operacional.

20 Artículo 10.-Alcance de Autoridad.-

21 Nada de lo contenido en esta Ley se interpretará en el sentido de autorizar al
22 Negociado o a sus funcionarios y empleados públicos a ejercer supervisión o control alguno
23 sobre la Policía de Puerto Rico, la Guardia Nacional de Puerto Rico, la Oficina de Control

1 de Drogas de Puerto Rico y el Departamento de Justicia, o cualquier otra agencia
2 gubernamental u organismo responsable del cumplimiento de la ley o de la prevención,
3 investigación y procesamiento criminal, con excepción de aquellos acuerdos previos con las
4 agencias para combatir el narcotráfico y trasiego ilegal de armas.

5 Artículo 11.-Integración de Funciones Administrativas y Adopción de Plan de
6 Trabajo

7 Dentro de los primeros (90) días siguientes al asumir su cargo, el Superintendente
8 Auxiliar deberá elaborar y presentar un plan de trabajo completo y detallado que integre
9 dentro de la estructura administrativa, las tareas relacionadas con planificación, compras,
10 auditorias, preparación de presupuesto y las tareas relacionadas con la administración de
11 personal del Negociado. La estructura que se establezca a esos efectos deberá promover la
12 economía funcional y eficiencia operacional de la agencia. Además, dicho informe deberá
13 contener un Plan de Trabajo Operacional que provea una proyección de las metas
14 operacionales del Negociado a corto, mediano y largo plazo. Cada una de las metas deberá
15 contener un calendario de estricto de cumplimiento, las estrategias para lograrlas y un
16 sistema de monitoreo de eficiencia del propio Negociado. Este informe deberá someterse al
17 Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa.

18 Artículo 12.-Reglamentación Especial de Funcionamiento Interno

19 El Superintendente Auxiliar establecerá mediante Reglamentos escritos la estructura
20 organizacional del Negociado y tendrá facultad para adoptar lo que estime necesario para la
21 implantación de esta Ley. Dichos Reglamentos entrarán en vigor una vez sean aprobados
22 por el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, mediante Orden Ejecutiva
23 firmada a esos efectos. Dicha Orden Ejecutiva deberá distribuirse entre las demás Agencias

1 e instrumentalidades del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como a las
2 agencias del gobierno federal en Puerto Rico.

3 Artículo 13.-Reglamentación Especial por parte de la Administración de Servicios
4 Generales (ASG).-

5 La Administración de Servicios Generales (ASG) adoptará un Reglamento Especial
6 y encaminará las medidas administrativas y fiscales necesarias para agilizar los procesos
7 compra de equipos, reparaciones y cualquier otro servicio necesario para el funcionamiento
8 del Negociado. La ASG deberá establecer un mecanismo similar de subasta formal,
9 prelicitación y cualquier otro mecanismo autorizado en ley de forma que se encaminen las
10 solicitudes de compra de equipos y/o reparaciones que no excedan de diez (10) días
11 laborales. La ASG consultará con la Oficina del Contralor para la adopción de este
12 Reglamento.

13 Artículo 14.-Comité Interagencial, sus funciones y obligaciones

14 Por virtud de esta Ley, se crea el Comité Interagencial de Seguridad Pública que
15 tendrá a su cargo la coordinación y colaboración para la implantación de los planes de
16 trabajo del Negociado.

17 Este Comité Interagencial estará constituido por el Secretario de Estado, quien lo
18 presidirá; el Superintendente Auxiliar del Negociado; el Secretario de Justicia; el
19 Superintendente de la Policía y el Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

20 El Comité Interagencial se reunirá cada noventa (90) días, rendirá un informe de
21 progreso al Gobernador y será responsable de asegurarse la asistencia de los funcionarios
22 del Gobierno de Puerto Rico a todas las reuniones y sesiones de trabajo de los “Task
23 Forces” existentes con el gobierno federal sobre seguridad pública.

1 Se dispone que los funcionarios encargados de representar al Gobierno de Puerto
2 Rico en estos grupos de trabajo con el gobierno federal estarán compelidos de asistir a
3 dichas reuniones como parte de sus obligaciones profesionales. El incumplimiento a estas
4 obligaciones pudiera ser sancionado por las disposiciones aplicables de la Ley Núm. 12_de
5 24 de julio de 1985, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental del
6 Estado Libre Asociado de Puerto Rico”.

7 Artículo 15.-Academia Especial y Nuevo Currículo de Adiestramiento

8 El Negociado y la Policía de Puerto Rico coordinarán la celebración de no menos de
9 una academia especial de reclutamiento para la nueva agencia creada en virtud de esta ley.
10 Se ordena además a los directores del Colegio Universitario de Justicia Criminal de la
11 Academia de la Policía de Puerto Rico a que en un término no mayor de noventa (90) días
12 contados a partir de la fecha de vigencia de esta Ley procedan con la ampliación del
13 currículo para incluir cursos relacionados a las nuevas técnicas de investigación criminal;
14 sistemas de conducta criminal por mapas digitalizados; cursos de ética y valores; Reglas de
15 Procedimiento Criminal, disposiciones del nuevo Código Penal; Sicopatología de la
16 Adicción; Procedimiento y Protocolo de atención a niños víctimas de maltrato; seminario de
17 orientación del Contralor sobre las funciones y el uso de propiedad pública; seminario de
18 educación de la Oficina de la Procuradora de la Mujer sobre procedimientos y casos de
19 violencia doméstica, acecho y hostigamiento en el empleo así como cursos coordinados
20 sobre investigación criminal con las agencias federales.

21 Artículo 16.-Acuerdos con Instituciones Universitarias

22 Se faculta al Superintendente Auxiliar del Negociado a establecer los acuerdos
23 necesarios con aquellas instituciones públicas y privadas que ofrezcan cursos de justicia

1 criminal con el objetivo de lograr el reclutamiento de estudiantes o el adiestramiento de
2 efectivos. Estos acuerdos deberán establecerse de conformidad a las normas y
3 reglamentaciones aplicables y se autoriza el uso de recursos de la agencia para estos fines.

4 Artículo 17.-Sobre Nuevas Alternativas Tecnológicas

5 Se ordena al Superintendente Auxiliar del Negociado a establecer un programa de
6 identificación, compra e implantación de una estrategia de utilización de alta tecnología para
7 la vigilancia, detección e identificación de sospechosos y organizaciones criminales, así
8 como la recopilación de evidencia para el eventual encausamiento. Las técnicas de uso de
9 tecnología deberán cumplir con las disposiciones aplicables de las leyes y la Constitución
10 del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos de
11 América.

12 Artículo 18.-Prohibición de Uso Ilegal de la Tecnología

13 Cualquier funcionario o empleado público que a sabiendas y con la intención de
14 perseguir, identificar o afectar la privacidad o intimidad de cualquier ciudadano, utilice
15 cualquier equipo tecnológico con fines políticos, religiosos o personales de cualquier tipo y
16 que no cumplan con los objetivos de esta ley, cometerá delito grave cuya pena de reclusión
17 fija será de cinco (5) años sin derecho a probatoria.

18 Artículo 19.-Implantación de Plan de Vigilancia de las Costas, Puertos y
19 Aeropuertos

20 Se ordena a que en un plazo de ciento veinte (120) días contados a partir de la firma
21 de esta Ley, el Negociado comience a implantar un plan de vigilancia electrónica y de alta
22 tecnología para la entrada de pasajeros y carga comercial por la ruta marítima y aérea así
23 como la vigilancia del radio de las costas de la jurisdicción del Estado Libre Asociado.

1 Dicho plan de vigilancia deberá cumplir con el estado de derecho vigente y el mismo deberá
2 realizarse en coordinación con las agencias federales. El plan deberá incluir a las islas de
3 Vieques, Culebra, la Isla de Mona y cualesquiera otra, que por razones de seguridad, deban
4 incluirse.

5 Artículo 20.-Sobre la Ley de Confiscaciones y la Otorgación de Prioridad

6 Se enmienda el inciso (c) del Artículo 15 de la Ley Núm. 93 de 13 de julio de 1988,
7 según enmendada, para que lea como sigue:

8 “Artículo 15. – Poderes, atribuciones y deberes.

9 La Junta tendrá, además, los siguientes poderes, atribuciones y deberes:

10 (a) . . .

11 (b) . . .

12 (c) Determinar mediante reglamento las normas para la asignación o
13 transferencia, sin costo alguno, de la propiedad confiscada a las agencias del
14 orden público para su uso oficial, *dándole prioridad al Negociado de las*
15 *Fuerzas Conjuntas contra el Narcotráfico y las Armas Ilegales.* Aquella
16 propiedad confiscada que no sea de utilidad para las agencias del orden
17 público podrá ser transferida con o sin costo por la Junta a las demás
18 agencias gubernamentales que tengan uso público para ello, sujeto a los
19 términos y condiciones que al efecto establezca.”

20 Artículo 21.-Cláusula de Exclusión

21 Si algún párrafo, artículo o parte de esta Ley fuese declarado inconstitucional por un
22 tribunal con jurisdicción y competencia, el resto de sus disposiciones quedarán en vigencia
23 en todo vigor y efecto.

1 Artículo 22.-Vigencia

2 Esta Ley comenzará a regir sesenta (60) días después de su aprobación.